



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021)**

*Proyecto discutido y aprobado en sala virtual*

Demandante:           ÁNGELA MARÍA CANO QUINTERO  
Demandados:       ACP COLPENSIONES y BEATRIZ ELENA BEDOYA BAENA  
Radicado:           05001 31 05 021 2018 00058 01  
Sentencia:           S-166

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a dar trámite al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, así como al grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor de COLPENSIONES, con ocasión de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín el día 26 de noviembre de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES**

A través de la presente acción judicial, se busca condenar "... a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, al

*reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la señora ÁNGELA MARÍA CANO QUINTERO, en calidad de cónyuge supérstite, la cual deberá concederse desde el 01 de febrero de 2009, día del fallecimiento del señor OVIDIO DE JESÚS CORREA TAMAYO...", incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año.*

*De manera subsidiaria, se solicita "Reconocer el retroactivo proporcional que corresponda, incluyendo las mesadas adicionales de los meses de junio y diciembre que se hubieren causado y sigan causando; desde el fallecimiento del afiliado OVIDIO DE JESÚS CORREA TAMAYO, es decir, desde el 01 de febrero de 2009, hasta el día del cumplimiento de la sentencia laboral, por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, o a la fecha de ingreso en la nómina de pensionados"."*

## **LOS HECHOS**

Expone como fundamento de sus peticiones, que contrajo matrimonio con el señor OVIDIO DE JESÚS CORREA TAMAYO "el 25 de enero de 1988", de cuya unión nacieron 5 hijos; que su esposo falleció el 1 de febrero de 2009; que solicitó la pensión de sobrevivientes el 1 de diciembre de 2016; que la entidad dispuso negar lo pretendido según Resolución GNR 4180 del 10 de enero de 2017 por el hecho de habérsela reconocido previamente a la señora BEATRIZ ELENA BEDOYA BAENA; que esa prestación económica le había sido reconocida a dicha señora en virtud de un fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín dentro del proceso radicado 015 2010 01101; que en la investigación administrativa realizada por el entonces ISS, se había concluido que entre el causante y la señora BEDOYA BAENA no existió convivencia; y que en ese proceso no se realizó ninguna labor para procurar su notificación luego de la citación como interviniente ad excludendum, ni tampoco se le nombró curador para que la representara.

## **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de fallecimiento del causante, así como el reconocimiento de la pensión a la señora BEATRIZ ELENA BEDOYA BAENA y la decisión posterior de negar lo solicitado por la demandante, indicando frente a los demás hechos que no le constan e invitando a su prueba en el proceso. Se opuso a las pretensiones indicando que la demandante no acredita haber convivido con el causante por lo menos 5 años continuos con anterioridad a la fecha de la muerte tal y como lo exigen los artículos 12 y 13 de la ley 797 de 2003. Como excepciones de fondo propuso inexistencia de la obligación de reconocer y pagar a la demandante la prestación solicitada, prescripción, improcedencia de la condena por intereses moratorios, buena fe, imposibilidad de condena en costas, improcedencia de la indexación y compensación.

La señora BEATRIZ ELENA BEDOYA BAENA por su parte, al contestar la demanda acepta el matrimonio del causante con la demandante, pero aclara que la relación entre ellos había terminado desde el 6 de diciembre de 1993 cuando se separaron de cuerpos. Acepta igualmente la existencia de 5 hijos del matrimonio, la fecha del fallecimiento, y todo lo relacionado con el reconocimiento a su favor de la pensión de sobrevivientes mediante sentencia judicial. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y como excepción de fondo propuso la de cosa juzgada.

## **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia del 26 de noviembre de 2020, el Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín CONDENÓ a COLPENSIONES a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante en un porcentaje de 71.8% a partir de diciembre de 2020, lo que implica reducir la mesada pensional de la señora BEATRIZ ELENA BEDOYA BAENA a un 28.2%. Ordena a

COLPENSIONES retener el porcentaje de 71.8% hasta tanto la sentencia esté ejecutoriada, momento en el cual se le entregará a quien se determine tener el derecho, junto con la indexación, autorizando realizar los descuentos en salud en el porcentaje establecido legalmente.

### **DEL RECURSO DE APELACIÓN**

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la parte actora interpuso recurso de apelación en cuanto no se impone condena alguna a la señora BEATRIZ BEDOYA a reconocer el retroactivo desde los tres años anteriores de la fecha en que la demandante reclamó la pensión de sobrevivientes, lo cual ocurrió en el año 2016, ya que fue apenas en ese momento que tuvo la oportunidad de hacer la reclamación por cuanto su anterior abogado tenía todos los documentos y no realizó trámite alguno. Solicita que se condene a la señora BEATRIZ ELENA BEDOYA a pagarle el 72% de la pensión que ella venía recibiendo desde diciembre del año 2014, para que de esa manera recupere el retroactivo al que tiene derecho.

Se conoce igualmente del asunto por **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

En esta instancia, el apoderado de COLPENSIONES solicita se revoque la decisión de primera instancia y se tenga en cuenta que la prestación aquí reclamada por la demandante ya fue reconocida a la señora BEDOYA BAENA en cumplimiento de un fallo judicial, por consiguiente, esta administradora de pensiones ha actuado conforme a derecho al expedir la Resolución GNR 165600 de fecha 4 de junio de 2015, por medio de la cual se dio cumplimiento a un fallo judicial, lo que torna en jurídicamente inviable desconocer o modificar lo que

en su momento se estableció, máxime cuando las decisiones judiciales hacen tránsito a cosa juzgada.

### **C O N S I D E R A C I O N E S:**

En la decisión de 1ª Instancia, el Juez 21º Laboral del Circuito de Medellín dispuso ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes reclamada a cargo de COLPENSIONES y a favor de la demandante ÁNGELA MARÍA CANO QUINTERO en calidad de cónyuge, en un porcentaje de 71.8%, lo que implicó la reducción a 28.2% a favor de la señora BEATRIZ ELENA BEDOYA BAENA, lo que se produjo en atención a lo establecido en el artículo 13 de la ley 797 de 2003, literales a, b y c, y en proporción al tiempo que tanto la cónyuge como la compañera permanente lograron demostrar como de convivencia con el causante, según pudo concluirse del material probatorio allegado al proceso.

Como la inconformidad planteada por las partes mediante el recurso de apelación tiene que ver exclusivamente con el retroactivo pensional a favor de la demandante, salvo lo que se deba conocer en virtud del grado jurisdiccional de CONSULTA que opera a favor de COLPENSIONES, ningún pronunciamiento podrá hacerse con respecto a temas adicionales como la absolución por concepto de intereses moratorios y con respecto al porcentaje de la prestación reconocido a cada una de las interesadas, pues modificar el fallo en este último aspecto en nada beneficia a la entidad y por el contrario si lo haría con respecto a la demandante principal o a la codemandada según fuere el caso, sin que ello sea posible ante su silencio en tal sentido a la hora de presentar los recursos de ley.

Lo primero que se debe advertir en torno a la situación planteada desde la presentación de la demanda, es que de la literalidad de las pretensiones de la señora ÁNGELA MARÍA CANO QUINTERO, en cuanto aspira a que se revoque la pensión de sobrevivientes

reconocida a la señora BEATRIZ ELENA BEDOYA BAENA, hecho ocurrido mediante sentencia judicial emitida por la Sala de Descongestión Laboral de este Tribunal en el marco de un proceso anterior, concluido y ejecutoriado, estaría, en esos términos, llamada al fracaso.

Tampoco, desde luego, podría ser viable ordenarle a COLPENSIONES el pago de la prestación a la demandante en un 100% desde el 1 de febrero de 2009 cuando se produjo el fallecimiento del causante OVIDIO DE JESÚS CORREA TAMAYO, en la medida que la entidad ha cancelado, de buena fe, las mesadas pensionales debidas a quien se declaró judicialmente beneficiaria de la prestación, esto es, la Sra. BEDOYA BAENA.

La primera opción es inaceptable por existir, en favor de aquella, una sentencia en firme que respecto de su derecho en sí mismo considerado ha hecho tránsito a cosa juzgada y, por ende, inmutable e inmodificable. La circunstancia de que la ahora demandante no hubiere hecho parte en aquel proceso no implica, *per se*, que pueda desconocerse la decisión que luego del amplio debate probatorio dio cuenta de la real y efectiva convivencia que la señora BEDOYA BAENA mantuvo con el causante por espacio superior a 5 años anteriores a la fecha del fallecimiento.

Así lo ha explicado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en reiteradas providencias, entre ellas la radicada al número 38450 del 22 de agosto de 2012, la SL 578 del 29 de enero de 2014, rad. 45310, o la SL 18102 del 7 de septiembre de 2016, rad. 45585. En la última de ellas indicó:

*“... en principio, cuando exista disputa del derecho a la pensión de sobrevivientes entre cónyuge y compañera permanente, o entre compañeras permanentes no es necesario ni riguroso integrar un litisconsorcio, **pues cada beneficiario puede ejercer su acción con prescindencia de los demás**, siendo la intervención ad excludendum la manera*

*adecuada por regla general de trabar la relación procesal, salvo cuando se ha previamente reconocido el derecho a uno de ellos o hay de por medio derechos de menores de edad."*

Y no sobra anotar, que el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Primera Dual de Descongestión de este Tribunal, data del 19 de julio de 2013, en tanto está documentado que la primera reclamación que hizo la demandante de su presunto derecho ante COPLENSIONES, fue radicada el 1 de diciembre de 2016.

Por el contrario, lo que sí sería factible, es que la demanda pueda dirigirse en contra de la Sra. BEATRIZ ELENA BEDOYA BAENA para que sea ella quien reconozca y pague a la accionante el porcentaje de las mesadas pensionales que haya recibido y que le correspondan, solo en el evento de que se demuestre que a la Sra. ÁNGELA MARÍA CANO QUINTERO también le asiste el derecho; o bien que COLPENSIONES asuma en su favor el pago de la prestación, en estos mismos términos, pero a partir del momento en que se declare el derecho.

En cualquier caso y en aras de que no quede margen de duda respecto del derecho de quien es hoy demandada, dentro de este proceso la señora BEATRIZ ELENA logró demostrar nuevamente su calidad de beneficiaria de la prestación en los términos de los artículos 12 y 13 de la ley 797 de 2003, respecto de la pensión causada por el fallecimiento del señor OVIDIO DE JESÚS CORREA TAMAYO.

Antes de continuar, es importante dejar en claro que las siguientes circunstancias han quedado plenamente acreditadas en el proceso: i) que el señor OVIDIO DE JESÚS CORREA TAMAYO falleció el 1 de febrero de 2009 (fl. 15); ii) la señora BEATRIZ ELENA BEDOYA BAENA solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente el día 28 de abril de 2009, mientras que

ÁNGELA MARÍA CANO QUINTERO hizo lo propio el 1 de diciembre de 2016 alegando su calidad de cónyuge supérstite, fls. 22 y 35; iii) mediante Resolución 016205 del 30 de agosto de 2010 el entonces ISS negó la solicitud de la primera, mientras que COLPENSIONES hizo lo mismo con la solicitud de la segunda mediante Resolución GNR 4180 del 10 de enero de 2017 (fls. 27/28 y 35/36); y iv) por sentencia del 19 de julio de 2013 proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, se dispuso el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora BEATRIZ ELENA BEDOYA BAENA, sin que en él se hubiera hecho parte la hoy demandante ÁNGELA MARÍA CANO QUINTERO, (fls. 97 a 125).

También hay claridad acerca del matrimonio celebrado entre el causante OVIDIO DE JESÚS y la demandante el 13 de diciembre de 1980 según la copia del registro civil de matrimonios visible a folios 15, el cual se mantuvo vigente hasta la fecha de fallecimiento de aquel en tanto no hay evidencia de que se haya producido una disolución legal del vínculo, aunque sí una separación de hecho como lo reconoce la propia señora ÁNGELA MARÍA, ya que al momento de la ocurrencia del fallecimiento, el señor CORREA TAMAYO no convivía con ella. Tampoco se discute la existencia de 5 hijos producto de esa relación matrimonial, llamados FERNANDO AUGUSTO, LINA MARCELA, MAR YURI ANDREA, LEIDY JOHANA y WILSON DANIEL, nacidos entre el 4 de octubre de 1981 el primero y el 26 de enero de 1988 el último, fls. 16 y 20.

Así las cosas, en razón del fallecimiento del señor OVIDIO DE JESÚS el 1 de febrero de 2009, es claro que la normatividad aplicable a la controversia jurídica es la ley 797 de 2003, artículo 13, el cual exige como requisito que el causante hubiera dejado acreditadas 50 semanas de cotización en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento. Exigencia que ya fue definida previamente mediante



sentencia judicial en el proceso que terminó con el reconocimiento de la prestación a la señora BEATRIZ ELENA.

Superado lo anterior, encuentra la Sala que el Juez de Primera Instancia no se equivocó al conceder la pensión reclamada, así como tampoco en el hecho de habérsela reconocida a ambas reclamantes, pues como bien lo señala el artículo 13 de la ley 797 de 2003, *"Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos 5 años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente."*

En el primer caso, como ya se advirtió, el derecho de la señora BEATRIZ ELENA ya se encuentra consolidado en la medida que existió un proceso judicial, con sentencia que se encuentra en firme, en el que se determinó su calidad de beneficiaria de la prestación.

De todas maneras, la Sala advierte que en este proceso se ratificó ese derecho al haberse acreditado la convivencia con el causante por espacio superior a 5 años con anterioridad a la muerte de lo que dieron cuenta los testigos que declararon en la audiencia de primera instancia y lo que se reafirma con la prueba documental que se logró recaudar.

Esos documentos hacen relación a lo siguiente: i) constancia de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud a la EPS SURA, en ese entonces SUSALUD, cuyo ingreso data del 11 de abril de 2007, fls. 41 y 61; ii) declaración extrajuicio rendida por el propio causante el día 30 de marzo de 2007 en el que informa de su convivencia en unión libre bajo el mismo techo con la señora BEATRIZ ELENA desde 4 años atrás, fl. 42; y iii) la sentencia dictada por la Sala de

Descongestión de este Tribunal en donde se concluyó que sí hubo convivencia entre la pareja, teniendo en cuenta además los testimonios de personas distintas a las que declararon en este proceso, fls. 56 a 125.

Ya en lo que tiene que ver con este proceso, los testigos MARTHA CECILIA SOTO FIGUEROA y LUÍS FERNANDO GIRALDO MAYA, amigos y vecinos de la demandante, relataron situaciones relacionadas con la vida de la pareja que como compañeros permanentes llevaron a cabo BEATRIZ ELENA y OVIDIO DE JESÚS, lo que ocurrió en el barrio La Tablaza por más de 5 años, primero en una casa ubicada en un primer piso y luego, a los 3 años, en el segundo piso de esa misma casa, lugares donde siempre los vieron compartir como pareja acompañados de una hija de ella.

En el segundo caso, más claro resulta aún el derecho que pretende la demandante principal, ÁNGELA MARÍA a ser declarada como beneficiaria de la prestación que reclama por el fallecimiento del señor OVIDIO DE JESÚS, dada su calidad de cónyuge con sociedad conyugal vigente y al haber acreditado un periodo de convivencia con el causante superior a 5 años con posterioridad a la fecha del matrimonio.

En tal sentido, es preciso recordar que a través de sentencias tales como las radicadas 41637 de 2012, 44454 de 2013, 42193 de 2014 o SL 16419 de 2017, la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de Casación Laboral, ha establecido que el cónyuge con vínculo matrimonial vigente separado de hecho, es beneficiario de la pensión de sobrevivientes si acredita haber tenido vida en común con el causante por un lapso no inferior a 5 años en cualquier tiempo.

Criterio que ha sido reafirmado en innumerables sentencias como la SL 1399 del 25 de abril de 2018, Rad. 45799, la SL 2232 del 29 de mayo de 2019, rad. 58324, la SL 5159 del 27 de noviembre de 2019, rad. 79.539, la SL 2746 del 22 de julio de 2020, rad. 61315, o más

recientemente la SL 1476 del 14 de abril de 2021, rad. 86270 para citar solo algunas, en punto a que no existe condicionamiento adicional alguno distinto a la acreditación del vínculo matrimonial vigente. En la última de ellas, por ejemplo, expresó:

*“En torno a este punto, importa a la Corte destacar que si bien esta Sala en la interpretación del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, ha entendido que tanto la cónyuge como la compañera permanente deben cumplir con el requisito de convivencia hasta la muerte y por un lapso no inferior a 5 años continuos con anterioridad al fallecimiento, cuando ocurra la muerte del pensionado, en una interpretación armónica con el inciso 3 del literal b) ibídem, tratándose del evento del cónyuge separado de hecho, como es aquí el caso, **ha precisado que la convivencia de los 5 años puede verificarse en cualquier tiempo**. Esto, por cuanto el legislador, cuando se refiere a la posibilidad del cónyuge de acceder al beneficio prestacional periódico cuando medie «separación de hecho», naturalmente presupone que no hay vida en común de la pareja de casados al momento de la muerte.*

*En efecto, según la jurisprudencia de la Sala, el cónyuge con unión matrimonial vigente, independientemente de si se encuentra separado de hecho o no de su consorte, puede reclamar legítimamente la pensión de sobrevivientes, siempre que hubiere convivido con el pensionado causante durante un interregno no inferior a 5 años, en cualquier tiempo.”*

Bajo esta perspectiva jurisprudencial, según la cual basta con que se acrediten esos 5 años en cualquier tiempo, la decisión en cuanto a esta beneficiaria se refiere debe ser confirmada, ya que los testigos traídos al proceso dan cuenta de que ese tiempo de convivencia efectivamente existió, además de que aquel continuó velando por el sostenimiento económico del hogar hasta el día de su muerte, no solo en términos económicos, sino con su presencia física frecuente.

También en su caso existen documentos relevantes que permiten adoptar tal conclusión, además de los testimonios que también fueron recibidos en primera instancia. Entre ellos se destacan los registros civiles de nacimiento de sus 5 hijos, todos nacidos en un periodo de tiempo de cerca de 7 años. Adicionalmente, se conoce de una

declaratoria de separación de cuerpos certificada por la ARQUIDIÓCESIS DE MEDELLÍN a partir del 6 de diciembre de 1993, lo que implica que existió una convivencia de por lo menos 13 años contados desde el matrimonio mismo.

De otro lado, de la información que brindaron los declarantes MARLENY DEL SOCORRO BEDOYA BAENA, LINA MARCELA CORREA CANO, e incluso la propia demandada BEATRIZ ELENA, se pueden extraer las siguientes conclusiones generales: i) la convivencia entre ambos se mantuvo de forma continua e ininterrumpida desde el matrimonio y por lo menos hasta el año 1993; ii) de dicha unión nacieron cinco hijos, dos de los cuales tenían algunos problemas de salud cuyos costos fueron asumidos por el causante hasta el día de su fallecimiento; iii) su separación se produjo por problemas entre la pareja, relacionados con el hecho de que él quería tener más hijos y ella no; y iv) después de la separación de su esposa y antes de conocer a la demandada BEATRIZ ELENA, el señor OVIDIO se fue a vivir con su hermano HUMBERTO aunque iba y venía a su hogar, del que nunca se alejó del todo, especialmente en términos económicos.

En consecuencia, superado el estudio del proceso en lo que al grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de COLPENSIONES respecta, es posible confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto reconoció el derecho pensional a favor de ambas reclamantes, así como el porcentaje definido en cada caso, el cual, como se dijo, no puede ser modificado en tanto ninguna de ellas se pronunció al respecto. El porcentaje de la prestación quedará entonces como lo ordenó el Juez en su sentencia de **71.8%** a favor de la señora ÁNGELA MARÍA y de **28.2%** a favor de la señora BEATRIZ ELENA.

Resta por establecer el asunto que cuestiona la apoderada de la demandante en el recurso de apelación, relacionado con el que considera su derecho al reconocimiento del retroactivo pensional desde por lo menos 3 años antes de la prestación de la reclamación

administrativa. Lo anterior en atención a la decisión del Juez de Primera Instancia de ordenar el pago a su favor solo desde el mes de diciembre de 2020 y no desde el momento de la reclamación y mucho menos desde el fallecimiento del causante.

Sin embargo, a juicio de la Sala se trata de una solicitud que va claramente en contravía del principio de la congruencia reglado en el artículo 281 del Código General del Proceso, el cual preceptúa expresamente que: *“La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que éste código contempla (...) No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en ésta”*.

Principio de cardinal importancia procesal que ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial, por medio del cual se ha establecido que los jueces y magistrados tienen que fallar según lo pedido y de acuerdo con lo probado. Acorde con lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia señaló en sentencia del 7 de julio de 2010, radicado 38700, respecto al principio en cuestión, lo siguiente:

*“...el juez de trabajo tiene la obligación de decidir la controversia sobre la base de los hechos formulados y las súplicas incoadas en la demanda introductoria, así como con lo argumentado en la respuesta al libelo demandatorio y las excepciones; y la circunstancia de que la ley procedimental laboral faculte al sentenciador de única o primera instancia para proferir un fallo extra o ultra petita, no quiere decir que dicho juzgador pueda salirse de los hechos básicos que hayan sido materia del debate, a los cuales debe estar sometido.*

*(...)*

*Sobre esta precisa temática, la Sala en sentencia reciente del 21 de mayo de 2010 radicado 33866, puntualizó:*

*(...)*

*De manera que la determinación de la congruencia o incongruencia tiene como parámetros de comparación: a) La sentencia enfrentada con las pretensiones y los hechos planteados en la demanda; y b) La sentencia confrontada con las excepciones, a condición de que aparezcan probadas y hubiesen sido propuestas, si así lo reclama la ley.*

*Es el cotejo de la sentencia con las pretensiones, al igual que con las excepciones, y los fundamentos fácticos de las unas y de las otras, lo que define si el pregón de incongruencia que se lanza sobre el fallo es fundado o no...”.*

Ahora bien, esta misma Corporación, en referencia a los límites de la regla de la congruencia, puntualizó en sentencias como la SL 911 del 9 de febrero de 2016, rad. 53019, lo siguiente:

*“Esta sala de la Corte, desde antaño ha señalado que es base esencial del debido proceso laboral, que las sentencias se enmarquen dentro de las pretensiones impetradas por la parte actora y, además, que tales resoluciones se acoplen a la causa petendi invocada por el promotor del proceso. Si es el fallador de segundo grado quien desborda ese estricto límite y resuelve ex novo sobre pretensiones que no fueron debatidas en las instancias, incurre en un quebranto del principio de congruencia consagrado en el art. 305 del estatuto procesal Civil.”*

En el caso concreto, examinada cuidadosamente la situación, y luego de un estudio minucioso y puntual del asunto, encuentra la Sala que adoptar una decisión de la forma como se pretende a través del recurso de apelación, en el que se busca que la demandada BEATRIZ ELENA BEDOYA BAENA asuma el valor del retroactivo pensional que dice tener la demandante, vulneraría el principio de congruencia y el derecho de defensa de aquella, pues se trata de una situación no discutida en el proceso ni planteada en el escrito de demanda.

Según el contenido de las pretensiones, el objeto principal del proceso ha sido el reconocimiento a favor de la señora ÁNGELA MARÍA CANO QUINTERO de la pensión de sobrevivientes generada

por el fallecimiento de su cónyuge OVIDIO DE JESÚS CORREA TAMAYO el 1 de febrero de 2009.

Y aunque también se buscaba declarar que a la señora BEDOYA BAENA “... *no le asiste derecho alguno*”, lo cierto del caso es que la pretensión de condena fue dirigida única y exclusivamente en contra de COLPENSIONES, de quien se solicita el pago del retroactivo pensional, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre, junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y las costas del proceso. En la primera pretensión principal de condena se solicita expresamente: “Se condene a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la señora ÁNGELA MARÍA CANO QUINTERO, en calidad de cónyuge supérstite, la cual deberá concederse desde el 01 de febrero de 2009 día del fallecimiento del señor OVIDIO DE JESÚS CORREA TAMAYO...”

Lo mismo ocurre con las pretensiones subsidiarias que fueron planteadas tendientes al reconocimiento de la prestación en forma proporcional desde el fallecimiento del causante.

De otro lado, en cuanto a los hechos se refiere, se puede evidenciar una completa y detallada narración de lo ocurrido como fundamento de esa pretensión de pensión de sobrevivientes, informándose acerca del reconocimiento de la pensión a la señora BEATRIZ ELENA mediante sentencia judicial, aunque sin mencionar de modo alguno la obligación que pudiera existir en cabeza suya de reconocerle el valor del retroactivo pensional recibido hasta ese entonces.

Finalmente, los fundamentos de derecho que fueron incluidos en el acápite correspondiente, hacen relación al derecho en sí mismo a la pensión de sobrevivientes y los requisitos legal y jurisprudencialmente establecidos cuando de pensión compartida entre cónyuge y compañera permanente se trata, sin advertir

tampoco alguna manifestación teniendo a reclamar de quien viene disfrutando la prestación de suma alguna por concepto de retroactivo pensional.

Visto lo anterior, considera la Sala que la demanda en su conjunto está cimentada en obtener el derecho a su favor de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su esposo OVIDIO DE JESÚS con cargo exclusivo a COLPENSIONES como entidad administradora del sistema. Ni en los hechos ni mucho menos en las pretensiones de la demanda, la parte demandante hizo referencia alguna a que la demandada BEATRIZ ELENA tuviera que pagar el porcentaje del retroactivo pensional a que hubiere lugar.

Consecuentes con lo anterior, la decisión de primera instancia deberá ser confirmada en todas sus partes.

Costas en esta instancia a cargo de la demandante y a favor de las demandadas. Como agencias en derecho se fija la suma de \$908.526.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **R E S U E L V E:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín, el día 26 de noviembre de 2020.

Costas en esta instancia a cargo de la demandante y a favor de las demandadas. Como agencias en derecho se fija la suma de \$908.526.



Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso, tal y como había sido anunciado al momento de dar traslado para alegar.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 132 del 29 de julio de 2021

**Consultable aquí:**  
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ  
MAGISTRADO  
TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ  
MAGISTRADO  
TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

FRANCISCO ARANGO TORRES  
MAGISTRADO  
TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: e1605c7ceecf4e5a5c5a66dc49912186a8b4e0a445064f065734900c2075a8ca  
Documento generado en 28/07/2021 01:37:46 PM